

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En estos autos RIT 59-2021, RUC 2000280372-1, seguidos ante el Séptimo Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, constituida por los magistrados don José Marinello Federici, doña Irma Tapia Valdés y doña Colomba Guerrero Rosen, por sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se resolvió:

I.- Que se absuelve a MARCO ANTONIO MERINO CARTES, ya individualizado, de ser autor de dos delitos de desacato, presuntamente cometido el día 11 de marzo y 2 de octubre, ambos de 2020, en esta ciudad.

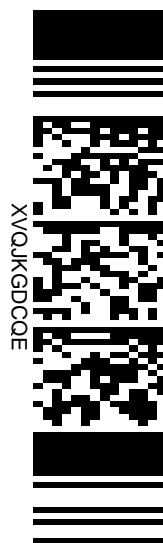
II.- Que, se condena a MARCO ANTONIO MERINO CARTES, ya individualizado, a la pena de CIENTO DIAS de presidio menor en su grado mínimo, con más la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de lesiones menos graves, en grado consumado, cometido en perjuicio de TESTIGO RESERVADO, el 2 de octubre de 2020, en la comuna de La Florida.

III.- Que, la pena privativa de libertad que se le ha impuesto al sentenciado Marco Antonio Merino Cartes, se le da por cumplida con el mayor tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, ininterrumpidamente, desde el 2 de octubre del año 2020, según consta del auto de apertura.

IV.- Que, se decreta la medida cautelar establecida en el artículo 9 letra b) de la ley 20.066, esto es, la prohibición del sentenciado Merino Cartes de acercarse a la víctima doña TESTIGO RESERVADO donde ésta se encuentre, su domicilio particular, lugar de trabajo o estudio en un radio no inferior a doscientos metros por el plazo de un año, contado desde la notificación de esta sentencia.

V.- Que, habiendo resultado igualmente perdidoso el ministerio público como el acusado, no se les condena en costas.

Que, habiéndose dado por cumplida la pena a MARCO ANTONIO MERINO CASTRO impuesta por esta sentencia, déjese sin efecto la prisión preventiva que fue decretada en su oportunidad y dese orden de libertad en su favor, sino debiera permanecer privado de ella por otra causa. Oficiese a Gendarmería.



Contra dicha sentencia, comparece doña Marjorie Carrillo Rosales, Fiscal de la Fiscalía Local de La Florida, quien interpone recurso de nulidad, para ante esta Corte, fundada en la causal prevista en la letra e) del artículo 374, con relación al artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, al infringir las exigencias de valoración y fundamentación establecidas en el artículo 297 del mismo cuerpo legal, que ordena que la fundamentación debe permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

CONSIDERANDO:

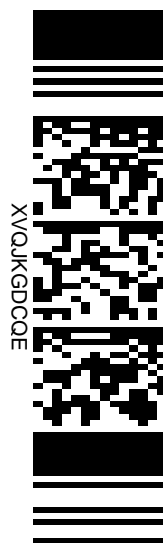
PRIMERO: Que, el recurso de nulidad se ha concedido como un recurso de derecho estricto al que se accede solamente en virtud de las causales y para los fines consagrados en la ley. No constituye una instancia en que se puedan revisar los hechos establecidos en el juicio, ni extenderse a otros aspectos que pudieran resultar criticables del fallo, pero que no han sido materia de su presentación.

SEGUNDO: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”*.

Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*.

A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa que *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”*.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.



“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

TERCERO: Que, la impugnación por esta causal dice relación con el entendimiento de la existencia de un vicio producido en el razonamiento probatorio del tribunal, por cuanto según el recurso, el tribunal habría infringido -en dicho proceso mental para fundar su convicción absoluta por los delitos de desacato - el principio lógico de la razón suficiente.

CUARTO: Que, se ha sostenido en forma clásica que el principio de razón suficiente fue formulado por Wilhelm Leibniz, quien lo habría elaborado para explicar el fundamento de las “verdades contingentes”. Surge la necesidad de diferenciar entre el principio ontológico, según el cual “tanto el ser, como el acontecer, tiene su razón suficiente”, del principio lógico, para el cual “Todo juicio, para ser verdadero, ha menester una razón suficiente”

En efecto, se sostiene que nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios: el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo.

El principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser “porque sí”, pues todo obedece a una razón. En suma, el principio de razón suficiente nos dice: “todo tiene una razón de ser”.

QUINTO: Que, sostiene el Ministerio Público que la causal invocada se configura toda vez que el tribunal ha infringido el principio de la razón suficiente, el que se ha formulado en los siguientes términos *“Ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”, lo que se relaciona con el raciocinio que busca fundamentar el conocimiento o con un criterio formal de fundamentación. Al buscar la razón suficiente del juicio, se debe investigar el apoyo o*



fundamento material de lo enunciado, lo que equivale a indagar en la prueba material vertida en el proceso, ello por cuanto sobre la base de la prueba rendida en juicio el sentenciador extraerá conclusiones relativas a hecho acreditado, participación, circunstancias anexas al hecho, etc., que tendrán como consecuencia una decisión de absolucón o condena. (Cerde San Martín “Valoración de la Prueba. Sana Crítica”, pág. 47, 1° edición, abril 2009)”

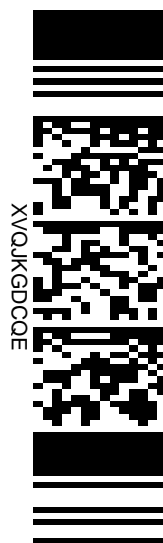
Refiere que, de esta manera, el tribunal deberá emitir un razonamiento fundado en conclusiones adecuadamente deducidas de la prueba sometida a su conocimiento y valoración, por lo que toda decisión del órgano jurisdiccional debe contener argumentos que la justifiquen, para ser entendida y aceptada por los intervinientes permitiendo de esta forma la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que arribe.

Relata que para efectos de conceptualizar resulta necesario tener presente los hechos ocurridos el 02 de octubre de 2020, respecto del delito de desacato que es el fundamento de su arbitrio:

“HECHO DOS:

Que con fecha 2 de octubre de 2020, aproximadamente a las 15:20 horas, el acusado MARCO ANTONIO MERINO CARTES, concurrió e ingresó al domicilio de la víctima, su cónyuge, doña TESTIGO RESERVADO, de la cual se encuentra separado de hecho, ubicado en DOMICILIO RESERVADO, acercándose a ella, cuando ésta bajaba de su vehículo y se abalanzó sobre la víctima, propinándole un golpe de puño en el brazo, mientras la insultaba. Como consecuencia de lo anterior, la víctima resultó con lesiones clínicamente leves consistentes en laceración de antebrazo derecho, según consta del Dato de Atención de Urgencia del Sapu Villa O'Higgins.

Con su actuar, el acusado quebranto lo ordenado cumplir con fecha 12 de marzo de 2020, en causa ruc 2000280372-1, rit 2062-2020, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, donde el Magistrado Sebastián Ernesto Zülch Barrios, decreto la Medida Cautelar establecida en el artículo 9 letras a y b de la ley 20.066, esto es el abandono del hogar común que comparte con la víctima doña TESTIGO RESERVADO y la prohibición del acusado a acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo u oficio o donde se



encuentre. Dicha resolución le fue notificada personalmente al acusado y se encontraba vigente al momento de ocurrir los hechos.

Calificación Jurídica, Participación Criminal y grado de Desarrollo:

Califica estos hechos como constitutivos del delito de Desacato en contexto de violencia intrafamiliar, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 5, 9, 10, 15 y 18 de la ley 20.066 y el delito de Lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, previsto y sancionado en el artículo 494 N° 5 y 399 ambos del Código Penal en relación con los artículos 5 y 9 de la ley 20.066. Los ilícitos se encuentran grado de desarrollo consumados y le corresponde al acusado una participación en calidad de autor, de conformidad con el 15 N° 1 del Código Penal y que, no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Solicita que se aplique al acusado la pena de 300 días presidio menor en su grado mínimo respecto del delito de Lesiones Menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y se aplique al acusado la pena de 2 años reclusión menor en su grado medio respecto del delito de Desacato en contexto de violencia intrafamiliar; más las accesorias especiales de la Ley 20.066, esto es, la establecida en el artículo 9 letra b) de la ley 20.066, esto es, la prohibición del acusado de acercarse a la víctima donde ésta se encuentre, su domicilio particular, lugar de trabajo o estudio en un radio no inferior a doscientos metros por el plazo mínimo de un año; y las costas de la causa.”

Luego, señala que en el considerando duodécimo de la sentencia recurrida, el Tribunal expone los medios de prueba aportados por el Ministerio Público con el objeto de acreditar los hechos ocurridos el día 2 de octubre de 2020, (lesiones menos graves y desacato): declaración de la víctima Julia Pérez Chapa, los testigos David Ruiz Leal y Francisco Pavéz Roa, fotografía de la lesión de la víctima, dato de atención de urgencia de la misma y la siguiente prueba documental y registro de audio de la audiencia del día 12 de marzo de 2020, que tienen especial relevancia para fundar la existencia del delito de desacato del 02 de octubre de 2020.

“1. Acta de Audiencia de control de detención, 14° Juzgado de Garantía de Santiago, Causa Ruc 2000280372-1, Rit 2062-2020, delito



desacato. Santiago 12 de marzo de 2020. Imputado Marco Antonio Merino Cartes. Víctima Julia Paola Pérez Chapa. Se apercibe al imputado conforme artículo 26 del Código procesal penal. Se declara legal la detención y se formaliza por el delito de desacato, autor, en grado de desarrollo consumado. Se decretan las siguientes medidas cautelares, Violencia Intrafamiliar, durante el tiempo de la investigación, artículo 9 de la ley 20.066, durante el tiempo que se extienda la presente causa, letra a), obligación de abandonar al ofensor el hogar que comparte con la víctima doña Julia Paola Pérez Chapa, ubicado en Santa Julia 474, la Florida; letra b) Prohibición de acercarse a la víctima Julia Paola Pérez Chapa, a su domicilio ubicado en santa Julia 474, La Florida, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Se ordena oficiar. Se fija un plazo para cierre de la investigación de 90 días. Dirigió la audiencia y resolvió Sebastián Ernesto Zülch Barrios.

2. Certificación del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, respecto a las medidas cautelares: Que, en causa RUC 000280372-1, Rit N° 2062-2020, seguida respecto al imputado Marco Antonio Cartes, RUT 007.926.043-6, y en virtud de lo ordenado mediante resolución de fecha 04 de febrero del presente, consta en la causa que en audiencia de control, de detención de fecha 12 de marzo de 2020, se decretaron en contra del imputado antes citado las medidas cautelares del artículo 9 letras a) y b) de la Ley 20.066 en cuanto a la víctima Julia Paola Pérez Chapa. Asimismo, se hace presente que no consta, al día de hoy, que las anteriores medidas cautelares hayan sido dejadas sin efecto. Santiago, 4 de febrero de 2021. Firmado. Jefe de unidad de Sala, 14 Juzgado de Garantía de Santiago.”

3. Registro del audio de la audiencia de control de detención, de 12 se marzo de 2012, del 14° Juzgado de Garantía, causa Rol 2062-2020.-

Sin embargo, el Tribunal en el considerando décimo quinto, dio por establecido el siguiente hecho:

“DECIMO QUINTO: Que, en consecuencia, la prueba testimonial que precede solo resultó suficiente para dar por acreditado que el acusado el día 2 de octubre de 2020, en horas de la tarde, se encontraba en el domicilio de Santa Julia 474, de la comuna de La Florida, desde que no reunió el estándar probatorio necesario para dar por acreditado de que, además, la



circunstancia de encontrarse en dicho domicilio quebrantaba una resolución judicial.”

Planteado lo anterior, se pregunta cuál fue el razonamiento del Tribunal para estimar que el estándar probatorio para dar por acreditado el desacato el día 2 de octubre de 2020 puesto que no reunía el estándar “necesario”, y no valorar positivamente la prueba documental.

En los considerandos décimo tercero y décimo cuarto, consta razonamiento que realizó el Tribunal para llegar a la conclusión señalada en el considerando décimo quinto.

Respecto de lo expuesto en estos dos considerandos, realiza las siguientes aclaraciones, por las particularidades de la presente causa.

Hasta el día del juicio oral, el 11 de junio de 2021, los hechos consignados como Uno, tenía como Ruc el 2000280372-1, Rit 2062-2020 del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, causa en la cual el imputado fue formalizado por el delito de desacato, decretándose las cautelares del art. 9 letras a) y b) de la Ley 20.066, y se presentó acusación por parte de Ministerio Público el día 21 de junio de 2020, postergándose varias veces la audiencia de preparación de juicio oral, hasta el día 26 de abril de 2021.

Asimismo, los hechos consignados como Dos, tenía como Ruc el 2001009072-6, Rit 8251-2020 del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, causa en la cual el imputado fue formalizado por **los delitos de lesiones menos graves en contexto Violencia Intrafamiliar y Desacato**, decretándose su prisión preventiva con fecha 03 de octubre de 2020, presentándose acusación en contra del imputado el día 17 de marzo de 2021, realizándose la audiencia de preparación de juicio oral el 26 de abril de 2021.

Ambas causas se remitieron al Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, asignándoseles los Rits 59-2021 y 60-2021, respectivamente.

El día 11 de junio de 2021, previo al inicio del juicio oral, la defensa, en atención a que en ambas causas era el mismo acusado y la misma víctima, solicitó la acumulación y consecuente vista conjunta y fallo en una misma sentencia, solicitud que fue acogida por el Tribunal.

Dicho lo anterior, se hace cargo de lo señalado por el Tribunal para que no se alcanzara el estándar para acreditar el delito de desacato.



Afirma que, es erróneo lo planteado en los párrafos cuarto a sexto del considerando DECIMO TERCERO:

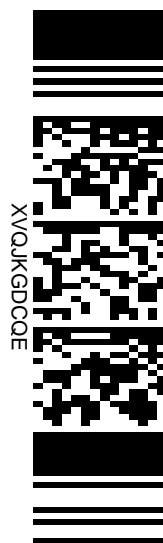
En relación a lo indicado en el párrafo cuarto y sexto, en ninguna de las dos causas, que se acumularon en la audiencia de juicio oral, existió un plazo judicial que venciera el día 2 de enero 2021; en la causa 2000280372-2, por los hechos del 2 de marzo de 2020, como ya se dijo, se fijó un plazo judicial de 90 días, y la investigación se cerró el 19 de junio de 2020, y ya el 21 de junio de 2020, el Ministerio Público había presentado acusación, sin siquiera haber sido apercibido por la defensa. No entiende de qué antecedentes el Tribunal desprende que algún plazo judicial vencía el 2 de enero de 2021, ni que el Ministerio Público debía cerrar investigación o el imputado solicitar el apercibimiento del cierre. De hecho, en la primera audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 10 de agosto de 2020, fue la defensa quien solicitó su postergación, fijándose fecha para el día 28 de noviembre de 2020.

Respecto de lo indicado en el párrafo quinto, señala que el inciso primero del artículo 122 del Código Procesal Penal señala: *“Finalidad y alcance. Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación.”* Sostiene que al día 02 de octubre de 2020, subsistía su necesidad, especialmente para cautelar la seguridad de la víctima, ya que el imputado concurrió al domicilio de ésta y la golpeó, causándole lesiones, lesiones por la cuales el Tribunal Oral si condenó al acusado.

Asimismo, el Juez de Garantía las decretó “durante el tiempo que se extienda la presente causa”, como consta del acta de audiencia de control de detención y la certificación del mismo Juzgado de Garantía, da cuenta que las cautelares del art. 9 a) y b) de la Ley 20.066 se encontraban vigentes el día 2 de octubre de 2020.

No corresponde al Tribunal Oral determinar su necesidad o vigencia, sólo constatar esta última.

Expone que el artículo 248 del Código Procesal Penal, expresamente indica que las cautelares serán dejadas sin efecto cuando sea comunicada la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, y en tal hipótesis, el juez revocará las medidas cautelares que se hubieren decretado,



de lo que se deriva que en el caso que el Ministerio Público presente acusación, si se mantienen vigentes las cautelares decretadas.

Reitera que, el Ministerio Público presentó acusación luego de transcurrido el plazo judicial, sin necesidad de ser apercibido por la defensa.

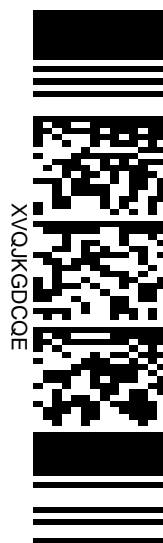
Para lo expuesto en el considerando DECIMO CUARTO, reitera lo ya señalado: el Ministerio Público en la causa que da origen al segundo desacato no pidió ampliación de plazo de investigación alguna, y además, de acuerdo a lo consignado por el Código Procesal Penal no se requiere que el Ministerio Público pida la renovación de las medidas cautelares para que estas sigan vigentes, sino que forma para determinar su pertinencia es a través de los mecanismos establecidos para la revisión de las medidas cautelares.

Dicho lo anterior, desprende claramente que el razonamiento del Tribunal es incompleto y parcial, alejado de lo ordenado por el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Concluye que, el Tribunal de manera “antojadiza” considera que las cautelares del art. 9 a) y b) de la Ley 20.066 no se encontraban vigentes a la fecha de comisión del segundo desacato, no valorando la prueba documental que acompañó de manera arbitraria, quitándole mérito probatorio a prueba que si cumple con estándar, excediendo sus facultades al indicar que en su opinión aquellas no se encontraban vigentes, haciendo caso omiso a la normativa respecto de la pertinencia y vigencia de las medidas cautelares, incurriendo en la infracción señalada.

En efecto, cuando se provee en el juicio prueba directa, de referencia e indiciaria, la valoración del Tribunal ha de recaer sobre toda la prueba de modo armónico y completo, es decir, debiendo el Tribunal realizar el proceso de evaluación de la prueba conforme a las reglas de inferencia y señalar en cada caso las relaciones lógicas que se producen del hecho establecido por la prueba directa y los establecidos por la prueba de referencia y la indiciaria o secundaria sin la debida referencia lógica a la prueba directa importa una verdadera falta de valoración de la misma.

La infracción denunciada trae aparejado un evidente perjuicio al ente persecutor y a la sociedad toda, cual es la absolución del acusado por el



delito de desacato cometido el día 02 de octubre de 2020, a pesar de encontrarse suficientemente acreditada su la existencia.

Finaliza solicitando a esta Corte que se acoja el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público en base a la causal prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal y se invalide declarando la nulidad de la audiencia de juicio oral y de la sentencia dictada en ella, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordene la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio.

SEXTO: Que, del análisis y como conclusión de todo lo hasta aquí expresado, en relación con la causal en estudio, invocada en el recurso de nulidad de que se conoce, tal como se anticipó, el Ministerio Público, sostiene esta causal indicando que se han infringido las exigencias de valoración y fundamentación establecidas en el artículo 297 del Código Procesal Penal, en particular vulnerar el principio lógico de la razón suficiente, que ordena que la fundamentación debe permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

SÉPTIMO: Que, tal como se ha dicho, el proceso penal, si bien dispone que los jueces pueden apreciar la prueba con total libertad, sí están limitados a no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados; por ello se les exige, como contrapartida, el deber de fundamentar dichos fallos. Así se lee del artículo 297 del Código Procesal Penal.

OCTAVO: Que lo anterior encuentra como sustento que el fallo que se dicte debe necesariamente argumentar y razonar, respecto de la totalidad de la prueba rendida en el juicio oral, asignándole una valoración acorde con los principios y conocimientos referidos en el motivo anterior. De actuarse de esa manera no podría existir entonces arbitrariedad en la decisión, sino que una justificación razonada de la misma. Convicción que, en todo caso, debe verificarse de acuerdo con la prueba producida en el juicio.

En la especie, el recurso de invalidación se funda en la infracción de las exigencias de valoración y fundamentación, en especial, los principios lógicos de la razón suficiente, en la valoración de la prueba que sustenta la



imputación de participación y que no se observan integralmente cumplidos en el fallo que se analiza.

NOVENO: Que, para efectos de resolver el recurso de nulidad impetrado, resulta necesario tener presente que el fallo impugnado, para resolver en la forma que lo hizo, señala en su considerando octavo y respecto al hecho N° 2 de desacato que nos convoca, los motivos del duodécimo al décimo quinto, y vigésimo primero, lo siguiente:

“OCTAVO: Que, para que exista el delito de desacato es necesario que, en los hechos establecidos en la acusación, concurren los elementos de tipicidad de la conducta que sanciona el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil o bien resultan atípicos.

En consecuencia, el persecutor debía necesariamente acreditar que la resolución que prohibían al acusado acercarse a la víctima TESTIGO RESERVADO, quebrantada por Merino Cartes, a la fecha de los hechos se encontraba vigente.

Continúa el fallo, indicando en sus motivos duodécimo al décimo quinto lo siguiente:

“Que en relación a los hechos ocurridos el día dos de octubre de 2020.

DUODECIMO: Que, al objeto de acreditar un delito de desacato y otro de lesiones ocurridos el día 2 de octubre, el persecutor incorporó la siguiente prueba:

Prueba testimonial constituida por los siguientes testigos: 1.- La víctima, doña TESTIGO RESERVADO, quien respecto a estos delitos refiere que ese día, 2 de octubre, venía desde el domicilio de su madre, él estaba en la casa, salió enojado porque ella no estaba, le dijo que veía mal a su madre y que la llevaría al médico, se molestó más, ella, se subió al auto y ahí él comenzó a golpearla, le daba puñetazo, en eso apareció un joven quien la defendió; lo recriminaba por estar golpeándola. El muchacho le dijo que se fuera y que él se quedaría con su cónyuge. Ella puso en marcha el vehículo y se alejó, por el espejo retrovisor los veía. Vio cuando el joven habla por su teléfono celular. De pronto la llamaron Carabineros quienes le dijeron que estaban en su casa por un llamado telefónico que se había hecho. Que, ella tenía una medida cautelar, pidiéndole que fuera a la Comisaria. Lo que hizo. Él ya no estaba en la casa.



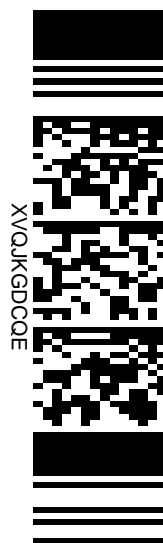
Además, declara David Salomón Ruiz Leal, quien afirma que el día 2 de octubre del año 2020, concurrió hasta un domicilio por unas lesiones y un delito de desacato. Alrededor de las 15:25 horas. Un ciclista le manifestó que una mujer estaba siendo agredida en DOMICILIO RESERVADO con Avenida Perú, en la comuna de La Florida, desde el domicilio signado con el número 474 salió un caballero, quien les exhibió su cédula de identidad y les dijo que él tenía una prohibición de acercarse a ese domicilio. Le preguntó por la señora, les dijo que no estaba. Él llamó a la unidad, a órdenes Judiciales, ya que él se había identificado con su cédula de identidad y le había señalado lo de la medida, desde la unidad le confirmaron que efectivamente existían las medidas cautelares y le entregaron el número telefónico de la señora. La llamó, le dijo que concurren hasta la unidad, cuando llegó con el detenido Marco Antonio Merino Cartes, ella ya estaba allí e hizo la denuncia.

El ciclista cuando los llamó le dijo que en DOMICILIO RESERVADO con Perú un hombre estaba agrediendo a una mujer. No se identificó y cuando ellos llegaron ya no estaba en el lugar. Ella tenía lesiones, una laceración de carácter leve, que le fueron constatada en el SAPU, Villa O'Higgins.

A la defensa le refiere que vio las cautelares en la oficina de órdenes Judiciales, de dos causas y, que solo se acuerda que tenía dos causas.

Se le exhibe fotografía, precisando el declarante que es una fotografía en blanco y negro por lo que no se logra ver con claridad la lesión, pero se trata del brazo de la afectada y, lo que él quiso dejar fue un registro de una zona roja en ese brazo.

Por último, comparece, Francisco Javier Pávez Roa, quien señala que el día 2 de octubre de 2020, alrededor de las 15:35 se gestionó el procedimiento. La denuncia la hizo la señora TESTIGO RESERVADO. Ellos recibieron un comunicado al celular de que DOMICILIO RESERVADO con Avenida Perú estaban agrediendo a una mujer, el que hacía el llamado era un ciclista. Agrega en los mismos términos que el testigo anterior lo sucedido una vez que concurren al lugar y precisa, que tomaron contacto con la señora TESTIGO RESERVADO una vez que se consiguieron su teléfono. Ella le dio cuenta de los hechos, en términos similares a los que relató en el Tribunal. Se encontraba muy nerviosa. Tenía una lesión en el brazo derecho,



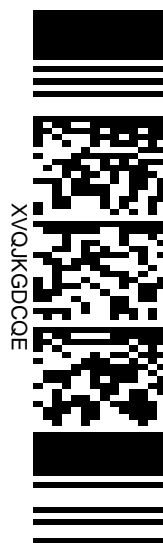
lesión que se hizo cuando su conyugue se lanzó sobre ella. Fue detenido en la vía pública pero el acusado salió del domicilio.

Luego, produce la siguiente prueba documental:

1: Acta de Audiencia de control de detención, 14 Juzgado de Garantía de Santiago, Causa Ruc 2000280372-1, Rit 2062 -2020, delito desacato. Santiago 12 de marzo de 2020. Imputado Marco Antonio Merino Cartes. Víctima TESTIGO RESERVADO. Se apercibe al imputado conforme artículo 26 del Código procesal penal. Se declara legal la detención y se formaliza por el delito de desacato, autor, en grado de desarrollo consumado. Se decretan las siguientes medidas cautelares, Violencia Intrafamiliar, durante el tiempo de la investigación, artículo 9 de la ley 20.066, durante el tiempo que se extienda la presente causa, letra a), obligación de abandonar al ofensor el hogar que comparte con la víctima doña TESTIGO RESERVADO, ubicado DOMICILIO RESERVADO, letra b) Prohibición de acercarse a la víctima TESTIGO RESERVADO, a su domicilio ubicado en DOMICILIO RESERVADO, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Se ordena oficiar. Se fija un plazo para cierre de la investigación de 90 días. Dirigió la audiencia y resolvió Sebastián Ernesto Zülch Barrios.

2: Certificación del 14 Juzgado de Garantía de Santiago, respecto a las medidas cautelares: □ Que, en causa RUC 000280372-1, Rit N° 2062-2020, seguida respecto al imputado Marco Antonio Cartes, RUT 007.926.043-6, y en virtud de lo ordenado mediante resolución de fecha 04 de febrero del presente, consta en la causa que en audiencia de control, de detención de fecha 12 de marzo de 2020, se decretaron en contra del imputado antes citado las medidas cautelares del artículo 9 letras a) y b) de la Ley 20.066 en cuanto a la víctima TESTIGO RESERVADO. Asimismo, se hace presente que no consta, al día de hoy, que las anteriores medidas cautelares hayan sido dejadas sin efecto. Santiago, 4 de febrero de 2021. Firmado. Jefe de unidad de Sala, 14 Juzgado de Garantía de Santiago.

3: Datos de atención de urgencia del que se leyó lo siguiente: SAPU Villa O O'Higgins, fecha: 2 de octubre de 2020. Hora de llegada: 16:45 horas. Nombre de la paciente TESTIGO RESERVADO. Dirección DOMICILIO RESERVADO. Datos de la atención: Laceración de ante brazo derecho.



Diagnóstico médico legal provisorio Leve. Firmando por doctor Luis león Pardo.

Para concluir la prueba de cargo, se reprodujo el audio de la audiencia de control de detención, de 12 se marzo de 2012, del 14 Juzgado de Garantía, causa 2062-2020, el que no obstante escucharse en pésimas condiciones puede concluirse que da cuenta de lo que el acta de dicha audiencia se incorporó mediante su lectura, precedentemente”.

Continúa el fallo, señalando:

“En relación al delito de desacato ocurrido el 2 de octubre:

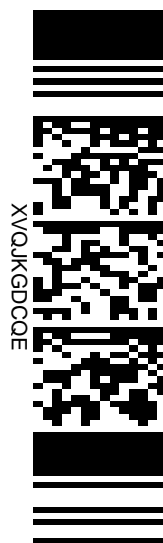
DECIMOTERCERO: Que, las medidas cautelares que se le impusieron al acusado Merino Cartes en el control de detención del 12 de marzo del año 2020, por el 14 Juzgado de Garantía, en causa Rit 2062-2020, lo fueron por el plazo de la investigación, plazo que se fijó en 90 días.

Que, la certificación de la Jefe de Unidad de Sala, da cuenta de que efectivamente dichas cautelares fueron decretadas el día 12 de marzo de 2020, en favor de la víctima doña TESTIGO RESERVADO, y que al 4 de febrero de 2021 no se habían dejado sin efecto.

Ahora bien, se certifica que dichas medidas cautelares no han sido dejadas sin efecto, pero, a la fecha de los ilícitos ocurridos el 2 de octubre de 2021 había transcurrido con creces el plazo de investigación que se dio, a saber, desde el día 12 de marzo al 2 de octubre, ambos del año 2020, ya habían transcurrido seis meses 20 días.

Que, vencido el plazo judicial para el cierre de la investigación el 2 de enero de 2021 (art.234 del Código procesal Penal), se produjeron los efectos previstos en el artículo 247, debiendo el fiscal cerrar la investigación o el imputado solicitar al juez para que apercibiera al fiscal para que procediera a tal cierre.

Que, no obstante, de haberse certificado por el 14 Juzgado de Garantía de que dichas cautelares no han sido dejadas sin efecto resulta absolutamente insuficiente para estimarlas vigentes desde que el plazo por las cuales se concedieron, venció con antelación a la ocurrencia de los hechos del 2 de octubre del 2020 y no se acreditó por el persecutor que se haya solicitado una ampliación de plazo para la investigación y que las medidas se mantuviesen en el evento de que se accediere a dicho plazo.



Que, las cautelares decretadas por un plazo condicionado al tiempo de la investigación no pueden quedar indefinidamente en el tiempo porque el ministerio público o la defensa técnica del imputado no instan ante el Juez de Garantía para que el persecutor cierre la investigación a la llegada del plazo.

DECIMOCUARTO: Que, efectivamente cuando el acusado supuestamente había quebrantado las medidas cautelares ya había transcurrido el plazo por el cual fueron concedidas y si bien se certifica que no han sido dejadas sin efecto tampoco se acreditó una ampliación de plazo para la investigación y que dichas medidas cautelares fueron renovadas.

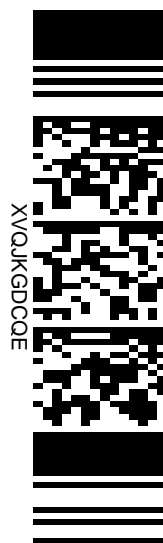
DECIMOQUINTO: Que, en consecuencia, la prueba testimonial que precede solo resultó suficiente para dar por acreditado que el acusado el día 2 de octubre de 2020, en horas de la tarde, se encontraba en el domicilio de DOMICILIO RESERVADO, desde que no reunió el estándar probatorio necesario para dar por acreditado de que, además, la circunstancia de encontrarse en dicho domicilio quebrantaba una resolución judicial.

Para luego concluir que:

VIGESIMOPRIMERO: Que, estos sentenciadores en función de la prueba producida en juicio respecto a ambos delitos de desacato y unido al mandato legal (artículo 340 del Código Procesal Penal) que prescribe nadie podrá ser condenado cuando el tribunal que lo juzga no logre la convicción, más allá de toda duda razonable, de la existencia del hecho punible, resolvieron absolver a Merino Cartes de los cargos levantado en su contra como autor de dos desacatos, ocurridos los días 11 de marzo y 2 de octubre, ambos del año 2020.”

DÉCIMO: Que, el Ministerio Público recurre de nulidad de la sentencia en estudio, solo respecto del hecho N° 2, sobre el delito de desacato ocurrido con fecha 02 de octubre de 2020, por cuanto estima que está suficientemente acreditado con las pruebas que acompañó al juicio, relacionadas en el motivo duodécimo de la sentencia recurrida, ya relacionado, y, sin embargo, el tribunal lo desestima, sin considerar las pruebas y sin fundamento legal alguno.

UNDÉCIMO: Que, los jueces de la instancia fundamentan su decisión en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y 234 del Código Procesal Penal, que disponen:



Artículo 240 del CPC: *“Cumplida una resolución, el tribunal tendrá la facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado.*

El que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.”

Artículo 234 del CPP: *“Cuando el juez de garantía, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes y oyendo al ministerio público, lo considerare necesario con el fin de cautelar las garantías de los intervinientes y siempre que las características de la investigación lo permitieren, podrá fijar en la misma audiencia un plazo para el cierre de la investigación, al vencimiento del cual se producirán los efectos previstos en el artículo 247.”*

Concluyen que, la medida cautelar no se encontraba vigente por haber transcurrido el plazo para la investigación, y, además, que el Ministerio Público no solicitó su mantención.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de los artículos citados en el motivo precedente, y, para efectos de resolver, es necesario, además, tener presente lo dispuesto en el artículo 122 del Código Procesal Penal, que señala:

“Artículo 122: Finalidad y alcance. Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación.

Estas medidas serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada.”

Por su parte, el artículo 248 del mismo código dispone:

“Artículo 248- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes:

- a) Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa;*
- b) Formular acusación, cuando estimare que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma, o*



c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación.

La comunicación de la decisión contemplada en la letra c) precedente dejará sin efecto la formalización de la investigación, dará lugar a que el juez revoque las medidas cautelares que se hubieren decretado, y la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se hubiere interrumpido.”

De las normas transcritas, es posible advertir que las medidas cautelares decretadas duran mientras subsistiere la necesidad de su aplicación, y el juez puede revocarlas cuando el ministerio público comunica su decisión de no perseverar en el procedimiento, cuyo no es caso de lo ocurrido en la causa Rit 2062-2020, del 14 Juzgado de Garantía. Es más, el mismo juzgado certificó con fecha 04 de febrero del año en curso, que éstas se encontraban vigentes.

DÉCIMO TERCERO: Que, luego de lo razonado y relacionado en los motivos precedentes, de un detenido análisis del fallo que se impugna, y de las alegaciones esgrimidas en el recurso, particularmente del considerando duodécimo, en que se describen las probanzas de que se valió en el juicio oral el Ministerio Público para acreditar el delito de desacato ocurrido con fecha 02 de octubre de 2020, y, fundamentalmente de los considerandos décimo tercero y décimo quinto, que refieren la valoración de los medios de prueba y la decisión de absolución, todo lo cual carece de un razonamiento lógico y coherente, es que a esta Corte le asiste la convicción por lo que comparte el contenido del libelo impugnatorio, en el sentido de que efectivamente se configura la causal de nulidad invocada por el recurrente prevista en el artículo 374 letra e), infringiéndose, conforme se explicita en el recurso, al haberse omitido los requisitos de la sentencia previstos en el artículo 342 letra c), específicamente, al haberse vulnerado el principio de la razón suficiente, y por no haber valorado sus conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297, todos del Código Procesal Penal, por lo que el presente arbitrio será acogido en los términos que se dirá en la parte resolutive.



DÉCIMO CUARTO: Que, por último, en concepto de esta Corte, la sentencia no se encuentra correctamente ajustada a las disposiciones legales que regulan su contenido. Los hechos y pruebas circunstanciadamente descritos en la impugnación, así como los razonamientos que en los que se fundan los considerandos del fallo impugnado, no resultan ni con mucho suficientes para permitir a los sentenciadores alcanzar la convicción necesaria a fin de decidir la absolución del acusado Merino Cartes, en relación con la imputación de ser autor del delito de desacato ocurrido el 02 de octubre del año 2020, que le fuera formulada. Todo lo cual, resulta suficiente para acoger los recursos de nulidad interpuestos.

Por todas estas consideraciones, teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 352, 372, 374 letra e) y 384 del Código Procesal Penal, **SE ACOGE** el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público, en contra del fallo de 16 de junio de dos mil veintiuno, dictado en la causa RIT 59-2021, RUC 2000280372-1, del Séptimo Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en el que se absolvió a MARCO ANTONIO MERINO CARTES del delito de desacato ocurrido el 02 de octubre de 2020 y, en su lugar se declara que dicha sentencia así como el juicio oral, son nulos, debiendo procederse por jueces no inhabilitados a la realización de un nuevo juicio oral..

Redactado por la ministra (s) doña María Paula Merino Verdugo.

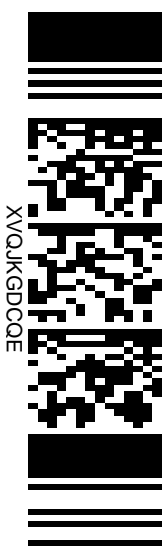
Regístrese y dese a conocer a los intervinientes en la audiencia fijada, sin perjuicio de su notificación por el estado diario; hecho, devuélvase la competencia.

Penal N° 2727- 2021.-

No firma la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la **Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones**, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por la Ministro (s) doña María Paula Merino Verdugo y el abogado integrante don Rodrigo Asenjo Zegers.





XVQJGDCQE

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Suplente Maria Paula Merino V. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

